



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA.

Guadalajara, Jalisco, a **26 VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.**

V I S T O S los autos para resolver en Sentencia Definitiva el juicio en materia administrativa radicado con el número de expediente 453/2023, promovido por [REDACTED], propio derecho en contra de las siguientes Autoridades: **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO** y la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, y:

R E S U L T A N D O:

1. Mediante actuación judicial celebrada con fecha **10 DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, se tuvo por recibido el escrito de demanda signado por [REDACTED], mediante el cual promovió por su propio derecho juicio en materia administrativa, mismo que por haberse hecho valer en tiempo y forma se admitió en contra de las Autoridades **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO** y la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, y teniéndose como actos administrativos impugnados, los siguientes:

1. El cobro por el refrendo anual vehicular relativo a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, así como la totalidad de sus accesorios.

2. Las cédulas de notificación de infracción 113/7577812, 113/8258222, 113/287343876, 113/289131949, 113/300340407, 113/300343015, 113/301495404, 113/315619394, 113/316281699, 113/316610536, 113/316704832, 113/319577602, 113/310132569, 113/321856063, 113/311178480, 113/327411756, 113/327736868, 113/335318131, 113/328125960, 113/328989166, 113/333613484, 113/352502456, 113/356356152, 113/357441900, 113/357891086, 113/362926726, 113/364870914, 113/366364633, 113/367590424, 113/368277835, 113/368669350, 113/377211970, 113/385898731, 113/385900285 y 113/386038823, atribuibles a personal adscrito a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco.

3. Las cédulas de notificación de infracción 113/7577812 y 113/8258222, atribuibles a personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara.

Así mismo se admitieron las pruebas ofertadas por no ser contrarias a la moral y encontrarse ajustadas a derecho. Se requirió a las autoridades demandadas para que al momento de dar contestación a la demanda remitiera copia certificada de las resoluciones impugnadas. Con las copias simples del escrito de demanda y anexos se ordenó emplazar a la autoridad demandada para que dentro del término de **10 DIEZ** días produjera contestación a la demanda instaurada en su contra apercibida que de no hacerlo así se le tendrían por ciertos los hechos que el actor le imputó de manera precisa salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultasen desvirtuados.

2. Por auto de fecha **13 TRECE DE ABRIL DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, se tuvo por recibido el escrito presentado por **ALEJANDRO RODRÍGUEZ CÁRDENAS**, en su carácter de **DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO**, y por medio del cual se le tuvo en tiempo y forma dando contestación a la demanda instaurada en su contra por la Accionante, así mismo se admitieron las pruebas ofertadas, por lo que con las copias simples del escrito de contestación se ordenó dar vista a la parte actora para manifestar lo que a su derecho correspondiera.

También se recibió el escrito presentado por **JOSÉ ANTONIO ROGELIO ASCENCIO RÍOS**, quien acudió al presente juicio en su carácter de **DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, y por medio del cual se le tuvo en tiempo y forma dando contestación a la demanda instaurada en su contra por la Accionante, así mismo se admitieron las pruebas ofertadas, por lo que con las copias simples del escrito de contestación se ordenó dar vista a la parte actora para manifestar lo que a su derecho correspondiera.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

De la misma manera, se tuvo por recibido el escrito presentado por **DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR**, en su carácter de **SECRETARIO DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**, y por medio del cual se le tuvo en tiempo y forma dando contestación a la demanda instaurada en su contra por la Accionante, así mismo se admitieron las pruebas ofertadas, por lo que con las copias simples del escrito de contestación se ordenó dar vista a la parte actora para manifestar lo que a su derecho correspondiera.

Finalmente, visto el estado procesal que guardaban los autos, tomando en consideración que no existía cuestión alguna pendiente por resolver, ni pruebas pendientes por desahogar, se ordenó traer los autos a la vista de las partes para que en el término de **3 TRES** días formularan por escrito sus alegatos y una vez transcurrido en demasía dicho periodo; se ordenó poner los autos a la vista del Magistrado Presidente de esta Sexta Sala Unitaria para que fuese dictada la Sentencia Definitiva.

CONSIDERANDO:

I.- COMPETENCIA. Esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver de la presente controversia, de conformidad a lo establecido por los artículos **52, 56, 57, 65, 67** y concordantes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; **1, 2, 3, 4, 5 y 10** de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; **1, 2, 3, 4, 6, 9, 31, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 48, 57, 58, 72, 73 y 74** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II.- PERSONALIDAD. La personalidad de la parte actora, [REDACTED], quedó debidamente acreditada en autos, de conformidad con el artículo **36 fracción II** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Por su parte, la personalidad de la autoridad demandada del **AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO**, quedó plenamente acreditada en autos pues en su representación legal acudió a juicio **ALEJANDRO RODRÍGUEZ CÁRDENAS**, en su carácter de **DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO**. La personalidad de la Demandada **SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**, quedó debidamente acreditada en autos pues acudió a juicio por medio de su Titular, ciudadano **DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR**. A su vez, la personalidad de la Demandada **SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, quedó debidamente acreditada en autos pues en su representación legal compareció **JOSÉ ANTONIO ROGELIO ASCENCIO RÍOS**, quien acudió al presente juicio en su carácter de **DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**; todo lo anterior en términos de los numerales **6 y 44** fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Por otro lado, la personalidad de la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**, no quedó acreditada en autos pues no se promovió escrito de contestación de demanda por su parte.

III.- VÍA. La Vía Administrativa elegida por la parte Actora es la indicada, toda vez que se trata de combatir un acto administrativo de autoridad, de conformidad en lo previsto por los artículos **1º, 2º, 9º** y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

IV.- ACCIÓN. La acción puesta en ejercicio por la parte Actora se encuentra debidamente prevista en el artículo **1º** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

V.- CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA. Tanto los conceptos de impugnación, como los medios de defensa que hizo valer las Autoridades Demandadas, no se transcriben por economía procesal, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen en la presente resolución, siendo aplicable la siguiente Jurisprudencia, misma que se transcribe y que a la letra dice:

No. Registro: 196,477.

Jurisprudencia

Materia(s): Común. Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VII, Abril de 1998

Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.- MEDIOS DE CONVICCIÓN OFERTADOS POR LAS PARTES. Enumeración y valoración de las pruebas ofertadas por cada una de las partes, mismas que han sido admitidas por esta Sexta Sala Unitaria a través de los acuerdos correspondientes:

Pruebas ofertadas por la parte actora:

1. Documental Pública: Consistente en el Recibo Oficial de Pago identificado con el número de folio **A47952694**, emitido por la Autoridad Hacendaria Estatal en favor de la Accionante del presente juicio, donde se le reconoce a la Parte Actora el carácter de propietario del vehículo identificado con el número de placas de circulación **JPC6876**, mismo que resultó idóneo para acreditar el interés jurídico que le asiste y al que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos **399** y **400** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

2. Elemento Técnico: Consistente en la impresión del adeudo vehicular, respecto del vehículo identificado con el número de placas **JPC6876**. Medio de prueba al que es posible otorgarle valor probatorio de conformidad a lo establecido por el artículo **298 fracción X, 406 bis** y **418** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; en virtud de que la información que de él se desprende, fue obtenida a través de una página oficial del Gobierno del Estado de Jalisco.

3. Documental Privada: Consistente en el acuse de recepción de la Solicitud debidamente elevada por el actor ante las autoridades demandadas, mediante las cuales se solicitó la expedición de las copias de las resoluciones impugnadas, medios de convicción al que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo **403** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

4. Presuncional Legal y Humana: A la que se le otorga valor probatorio de acuerdo con los numerales **415** y **417** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

5. Instrumental de Actuaciones: Probanza a la que se otorga valor probatorio, de conformidad con lo previsto por el arábigo **402** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Pruebas ofertadas por la Autoridad demandada de la Secretaría de Transporte:

1. Instrumental de Actuaciones; Consistente en todas las actuaciones dentro del presente procedimiento, ahora bien, toda vez que la oferente no precisó qué actuación en concreto le beneficiaba y los hechos controvertidos que pretende demostrar con la misma dicha probanza carece de valor probatorio.

2. Presuncional Legal y Humana; La cual hizo consistir en las presunciones tanto legales como humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, prueba esta que si bien fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos **35 fracción VIII** de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el **417** del Código de Procedimientos Civiles, ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le otorga valor probatorio.

Pruebas ofertadas por la Autoridad demandada de la Secretaría de Seguridad:

1. Instrumental de Actuaciones; Consistente en todas las actuaciones dentro del presente procedimiento, ahora bien, toda vez que la oferente no precisó qué actuación en concreto le beneficiaba y los hechos controvertidos que pretende demostrar con la misma dicha probanza carece de valor probatorio.

2. Presuncional Legal y Humana; La cual hizo consistir en las presunciones tanto legales como humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, prueba esta que si bien fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos **35 fracción VIII** de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el **417** del Código de Procedimientos Civiles, ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le otorga valor probatorio.



Pruebas ofertadas por la Autoridad demandada del Ayuntamiento de Guadalajara:

1. Instrumental de Actuaciones; Consistente en todas las actuaciones dentro del presente procedimiento, ahora bien, toda vez que la oferente no precisó qué actuación en concreto le beneficiaba y los hechos controvertidos que pretende demostrar con la misma dicha probanza carece de valor probatorio.

2. Presuncional Legal y Humana; La cual hizo consistir en las presunciones tanto legales como humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, prueba esta que si bien fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos **35** fracción **VIII** de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el **417** del Código de Procedimientos Civiles, ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le otorga valor probatorio.

VII. ESTUDIO DE LAS CASUALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a entrar al estudio de la Litis planteada, esta Sexta Sala Unitaria se avoca al estudio de la Causal de Improcedencia prevista por la **fracción XII** del artículo **29**, en relación con el numeral **1**, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, pues el último de los numerales invocados, expresamente refiere que el juicio de nulidad en materia administrativa es improcedente en contra de normas emanadas del Congreso del Estado de Jalisco, como en la especie resulta ser la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2023.

Con la finalidad de resolver lo conducente, se considera oportuno transcribir los preceptos normativos aplicables a la causal de improcedencia en estudio, contenidos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; mismos que a la letra establecen lo siguiente:

Artículo 1. El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo.

Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas del Congreso. En estos casos la demanda deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación, ante las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa.

Artículo 29.- Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos:

XII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.

Artículo 30.- Procede el sobreseimiento del juicio:

I.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

Una vez destacado el contenido de las disposiciones normativas que guardan relación con la Causal de Improcedencia que se analiza, este Juzgador advierte que la acción intentada por la Parte Actora en su escrito de demanda, se encuentra planteada en contra de diversos actos, como en la especie resultan ser cédulas de infracción y el cobro del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación relativo a los ejercicios fiscales **2022 y 2023**, los cuales encuentran su sustento en los ordinales **23 fracción III** de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para dichos periodos.

Precisado lo anterior, y respecto del Derecho en comentario relativo al ejercicio fiscal 2023, este Juzgador analiza lo hecho valer por la parte actora en su escrito de demanda, en donde sustancialmente se duele en contra del cobro relativo al derecho por concepto de refrendo vehicular el cual manifiesta resulta inconstitucional, inequitativo y desproporcional, pues medularmente sostiene que el artículo **23 fracción III** de la Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del **2023**, donde encuentra su fundamento para el cobro del tributo mencionado, toma en cuenta elementos ajenos a la actividad técnica que realiza la autoridad para el cobro de dicho servicio, siendo que para el cobro de derechos debe existir una relación entre la actividad realizada y la contraprestación, vulnerando en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad contenidos en el numeral **31 fracción IV** Constitucional.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

En tales condiciones, se colige que -de manera sustancial- la demandante adujo haber resentido violaciones a su garantía de legalidad tributaria, ello al afirmar que el cobro materia de controversia fue efectuado con sustento en un precepto normativo que transgrede los principios de proporcionalidad y de equidad consagrados en el arábigo **31 fracción IV** Constitucional.

Ahora bien, atendiendo a la materia de la controversia planteada por la Parte Actora, se estima oportuno citar el contenido de las normas que guardan relación con lo que aquí se analiza:

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Artículo 23. *Por los servicios que preste la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Seguridad y, en su caso, la Secretaría de la Hacienda Pública, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:*

III. *Por refrendo anual y Tarjeta de Circulación de PVC con código de seguridad QR para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público:*

a) *Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques servicio particular y público:*

\$734.00

b) *Placas de demostración:*

\$1,788.00

III Bis. *Por refrendo anual y Tarjeta de Circulación en papel para motocicletas:*

\$314.00

Tratándose de vehículos fabricados con sistema de propulsión híbrido sin considerar los modificados o hechizos, pagarán el 50%, por derecho de refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular previsto en la fracción III de este artículo, en el caso de vehículos eléctricos, estarán exentos del pago de los derechos referidos.

Los pagos previstos en las fracciones III y III Bis de este artículo deberán efectuarse en el periodo comprendido del 02 de enero al último día hábil del mes de marzo de 2023 (dos mil veintitrés).

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO.

Artículo 65.- *La obligación fiscal nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales.*

Dicha obligación se determinará y enterará conforme a las leyes fiscales vigentes en el momento de su nacimiento, pero podrán ser aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

Artículo 66.- *El crédito fiscal, es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida y debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las leyes fiscales respectivas.*

[...]

Artículo 67.- *La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo establecido en las leyes fiscales respectivas, determinan que el crédito sea exigible.*

Destacado lo anterior, es menester señalar que en virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad, y bajo esa tesitura, de conformidad con lo previsto en el artículo 1° Constitucional ante citado, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio *pro-homine*, o pro-persona.



Así pues, es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 10. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Ilustrativo de lo anterior resulta la siguiente jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"...POR MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS SEÑORES MINISTROS COSSÍO DÍAZ, FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ZALDÍVAR LELO DE LARREA, VALLS HERNÁNDEZ, SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ORTIZ MAYAGOITIA Y PRESIDENTE SILVA MEZA, se determinó que el modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad que debe adoptarse a partir de lo establecido en el párrafo 339, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 12.511. Rosendo Radilla Pacheco, contra los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 1º, 103, 105 y 133, de la Constitución Federal, propuesto por el señor Ministro Cossío Díaz, es en el sentido de que: 1. Los jueces del Poder Judicial de la Federación al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. 2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones. Y 3. Las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultados para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos. Votaron en contra los señores Ministros: AGUIRRE ANGUIANO, PARDO REBOLLEDO, por estimar que ésta no es la instancia adecuada para realizar este análisis, y AGUILAR MORALES, por la razón aducida por el señor Ministro Pardo Rebolledo". Es el resultado de la votación del tema concreto que estamos abordando. Señor Ministro Cossío Díaz..."

No obstante lo mencionado en los párrafos anteriores, no debe perderse de vista que son precisamente los Juzgadores de Amparo quienes cuentan con la competencia originaria para efectuar el control concentrado de la constitucionalidad y/o convencionalidad de las normas generales, pues lo cierto es que si bien esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco cuenta con facultades para llevar a cabo un ejercicio de control difuso, **esta actividad se encuentra limitada al análisis de legalidad de una norma respecto de un acto administrativo determinado**, ello acorde a los lineamientos precisados en el siguiente criterio que resulta de observancia obligatoria para este Juzgador:

Época: Décima Época; Registro: 2006186. Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I; Materia(s): Común, Administrativa. Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.); Página: 984

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

*Si bien es cierto que, acorde con los artículos 10. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, **en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin***



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconventionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.

Bajo este lineamiento, a consideración del suscrito Magistrado, **respecto del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación por el periodo correspondiente al ejercicio 2023, no existe un acto administrativo respecto del cual resulte susceptible realizar un ejercicio de control difuso**, esto en virtud de que la Parte Actora comparece a demandar el cobro de un derecho previsto en una norma emanada del Congreso del Estado de Jalisco, que a la fecha de presentación de la demanda aún no contaba con el carácter de exigible, esto en término de los ya invocados artículos **65, 66 y 67** del Código Tributario Estatal.

En virtud de lo anterior, es evidente que las violaciones aducidas por la accionante en el escrito de demanda invariablemente se encuentran encaminadas a combatir la constitucionalidad de una disposición normativa general emanada del Congreso del Estado de Jalisco, como resulta ser el numeral **23 fracción III** de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2023; disposición normativa respecto de la cual este Tribunal no se encuentra facultado a analizar su constitucionalidad, al existir una prohibición expresa en el ya invocado artículo **1** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Considerando lo anterior, y en atención a que no se desprende en autos que la Autoridad Demandada haya ejercido sus facultades de determinación, se insiste, porque el crédito fiscal derivado del refrendo anual de placas vehiculares del ejercicio fiscal 2023 aún no podía ser exigido, ni tampoco se determinaron recargos, actualizaciones ni gastos de ejecución del derecho en comentario, es que este Juzgador estima actualizada la **CAUSAL DE IMPROCEDENCIA** respecto de la contribución en comentario por el periodo que ya se destacó, pues respecto de éste, la materia del presente juicio no radica en el análisis de legalidad de un acto administrativo determinado donde resulte posible realizar un ejercicio de control difuso respecto de una norma en el que éste haya tenido su sustento, sino que la materia de la litis trabada por la Accionante, se encuentra encaminada a combatir la constitucionalidad del ordinal invocado en el párrafo antecede, mismo que no puede ser analizado bajo tal parámetro por este H. Tribunal.

Por lo expuesto en líneas anteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo **29, fracción XII**, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, y al haberse actualizado una **CAUSAL DE IMPROCEDENCIA** que impide a esta Sala Unitaria emitir un pronunciamiento de fondo en la presente contienda referente al Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación por el ejercicio fiscal 2023, lo conducente es decretar el **SOBRESEIMIENTO** del presente juicio únicamente respecto de ese concepto, ello, esto con sustento en lo establecido por el artículo **30 fracción I**, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

En un segundo orden de ideas, esta Sexta Sala Unitaria se avoca al estudio de la causal de improcedencia hecha valer por la Autoridad Demandada del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, en la cual argumenta sustancialmente que se actualiza la hipótesis jurídica prevista por la **fracción I** del artículo **29**, en relación con el **30 fracción I**, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, pues estima que en el caso que nos ocupa, la Parte Actora no demuestra fehacientemente el interés jurídico que le asiste para interponer el presente juicio de nulidad y para demandar la nulidad de las cédulas señalada como actos impugnados, toda vez que no aportó ningún elemento de convicción idóneo y eficaz que demuestre la titularidad de un derecho jurídicamente tutelado por la ley.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

Con la finalidad de resolver lo conducente, se considera oportuno transcribir los preceptos normativos aplicables a la causal de improcedencia en estudio, contenidos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mismos que a la letra sostienen lo siguiente:

Artículo 4.- Sólo podrán intervenir en el juicio las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión.

Artículo 29.- Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos:

I.- Que no afecten los intereses jurídicos del demandante o que se hayan consumado de un modo irreparable;

Artículo 30.- Procede el sobreseimiento del juicio:

I.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

En primer término, es importante destacar que, tratándose del Juicio de Nulidad en Materia Administrativa, el Interés Jurídico, como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado por la ley que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible, pueda acudir ante este órgano jurisdiccional a solicitar la nulidad de los actos impugnados, lo anterior en términos del artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, invocado previamente. Sirve de apoyo la siguiente Tesis que a la letra nos establece:

No. Registro: 181,719

Tesis aislada

Materia(s): Común

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XIX, Abril de 2004

Tesis: II.2o.C.92 K

Página: 1428

INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE.

Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgrede, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Ahora, partiendo de la premisa anterior, debemos considerar que en el caso que nos ocupa, los actos materia de controversia resultan ser múltiples cédulas de infracción y el cobro del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación, respecto del vehículo automotor identificado con el número de placa de circulación **JPC6876**.

En ese contexto, es oportuno destacar que en términos del ordinal **174** de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, establecía que las infracciones a las que se refiere dicha legislación son **aplicables tanto al conductor como al propietario del vehículo** y, en todo caso, ambos están obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sanción correspondiente la legislación; en ese mismo tenor, tomando en consideración que mediante el Decreto número **28855/LXIII/22**, se abrogó el cuerpo normativo aludido y entró en vigor la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, en este último se recogió aquella misma disposición, esto en su artículo **358**, por ello, este Juzgador estima que las sanciones pecuniarias generadas por infracciones a la normativa que regula la movilidad y el tránsito afectan **la esfera jurídica tanto del propietario del vehículo al que se imponen, como al conductor que actualizó el supuesto de infracción**, de ahí que pueda concluirse que ambos cuentan con un derecho tutelado por la Ley para demanda la nulidad de este tipo de actos. Criterio anterior que se robustece con la siguiente Tesis:

Registro digital: 2006923

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Administrativa



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

Tesis: (III Región)4o.47 A (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1167

Tipo: Aislada

INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE UNA INFRACCIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Y LA TARJETA DE CIRCULACIÓN SON SUFICIENTES PARA ACREDITARLO CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE AQUELLA Y NO SE TRATE DE UNA CONDUCTA PROPIA E INHERENTE ÚNICAMENTE AL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO INVOLUCRADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

La cédula de notificación de una infracción en materia de movilidad y transporte y la tarjeta de circulación son suficientes para acreditar el interés jurídico en el juicio contencioso administrativo en el que se demanda la nulidad de aquella, sin que resulte indispensable acreditar la propiedad del vehículo involucrado, si la infracción no deriva de una conducta propia e inherente únicamente a su propietario, sino que atañe al responsable de su movilización terrestre. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, las infracciones a las que se refiere dicha legislación son aplicables tanto al conductor como al propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sanción correspondiente. No siendo aplicable, ni analógicamente, la jurisprudencia 1a./J. 61/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 175, de rubro: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE.", en virtud de que trata un tema distinto; la manera de acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que se reclame el embargo trabado sobre un vehículo automotriz, en el que se establece que, por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que éste es su titular.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

En ese orden de ideas, a juicio de quien esto resuelve se concluye que en la presente instancia no queda acreditada la Causal de Improcedencia aludida, puesto que los medios de convicción aportados por la Parte Accionante sí resultan idóneos y eficaces para acreditar que ésta resulta ser la Propietaria del vehículo de la Marca Nissan, identificado con el número de Serie **3N1CN7AD6HL888344**, particularmente el Recibo Oficial de Pago **A47952694**, que fue aportado en original y el cual fue emitido por la Autoridad Hacendaria del Estado de Jalisco, quien es la encargada del registro y padrón vehicular en nuestra entidad, lo cual es suficiente para evidenciar el derecho subjetivo jurídicamente tutelado por el numeral **358** del ordenamiento aplicable al caso concreto que se encuentra vigente, Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, ya que ese precepto establece que tanto el propietario como el responsable de la movilización terrestre son responsables solidarios de las infracciones que recaigan a un vehículo, por ello, no exista constancia fehaciente de la actualización de la Causal de Improcedencia aludida por las Autoridades Demandadas en comentario y resulte conducente desestimarla por inoperante y proceder al análisis de fondo de la controversia planteada. Robustece el criterio anterior la Tesis que se invoca a continuación:

Registro digital: 161585

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: I.9o.A.149 A

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 2062

Tipo: Aislada

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES.

De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

necesario que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la consecuencia sería no analizar el fondo del asunto.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla.

VIII.- ESTUDIOS DE LA ACCIÓN Y DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. Sin que de oficio se advierta la existencia de causal de improcedencia alguna por resolver, esta Sexta Sala Unitaria se avoca al estudio de la litis en los términos previstos por los ordinales **72** y **73** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Como una noción de primer orden, acorde a lo estipulado en la fracción I del segundo de los arábigos invocados en el párrafo anterior, debe precisarse que los actos controvertidos susceptibles de analizarse en la presente instancia resultan ser el cobro por el refrendo anual vehicular relativo al ejercicio fiscal **2022**, las cédulas de notificación de infracción **113/287343876**, **113/289131949**, **113/300340407**, **113/300343015**, **113/301495404**, **113/315619394**, **113/316281699**, **113/316610536**, **113/316704832**, **113/319577602**, **113/310132569**, **113/321856063**, **113/311178480**, **113/327411756**, **113/327736868**, **113/335318131**, **113/328125960**, **113/328989166**, **113/333613484**, **113/352502456**, **113/356356152**, **113/357441900**, **113/357891086**, **113/362926726**, **113/364870914**, **113/366364633**, **113/367590424**, **113/368277835**, **113/368669350**, **113/377211970**, **113/385898731**, **113/385900285** y **113/386038823**, atribuibles a personal adscrito a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco y las cédulas de notificación de infracción **113/7577812** y **113/8258222**, atribuibles a personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, todos estos actos recaídos al vehículo identificado con el número de palcas **JPC6876**.

Ahora bien, este Juzgador estima pertinente que el estudio de la presente controversia se aborde en tiempos diversos, acorde a la naturaleza de los actos impugnados en comentario, y en atención a la causa de pedir plasmada por la parte actora en su escrito de demanda; en ese contexto, primeramente se analizará la validez de las cédulas de infracción mencionadas y con posterioridad lo relativo al cobro del refrendo anual de tarjeta de circulación y sus accesorios.

Fijados los actos impugnados, esta autoridad jurisdiccional procede a realizar un análisis de la demanda interpuesta, ya que la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, el artículo **35** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ni algún otro precepto contenido en dicho ordenamiento, que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda. Robustece el criterio asumido por esta autoridad, la siguiente jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, misma que encuentra aplicación analógica.

Época: Novena Época

Registro: 1003972

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1.

Común Segunda Parte - TCC Sexta Sección -

Procedimiento del amparo indirecto

Materia(s): Común

Tesis: 2093

Página: 2410

DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO.

La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

Así pues, se tiene que la parte actora en su escrito inicial de demanda manifestó que tuvo conocimiento de los actos impugnados el día **9 nueve de enero del año 2023 dos mil veintitrés**, al momento de acudir ante una Oficina Recaudadora dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, con la finalidad del efectuar el pago del derecho de refrendo anual, cuando se hizo conocedor que el vehículo de su propiedad identificado con el número de palca de circulación **JPC6876**, contaba con un adeudo constituido por concepto de las cédulas materia del presente juicio, motivo por el cual, como lo acredita con los medios de convicción ofertados al presente sumario, elevó la solicitud de expedición de información ante las autoridades hoy demandadas con la finalidad de que le fueran dadas a conocer las resoluciones impugnadas, instancias que a la fecha de la presentación de la demanda no ha sido atendidas, por ello, acude ante este Tribunal a solicitar la nulidad de los actos impugnados que se precisaron con anterioridad pues no le fueron dados a conocer.

Analizadas las piezas de actuaciones, este Juzgador estima que en el caso concreto, ante la manifestación vertida por la Parte Actora en sentido de desconocer el contenido documental de los actos combatidos, **invariablemente resultaba una obligación para las Autoridades Demandadas, exhibir a juicio ya sea en original o en copia certificada dichos actos**, pues de conformidad con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante ese supuesto -cuando un actor se manifiesta desconocedor del acto administrativo que impugna- al momento de contestar las demandas se encuentran obligadas a exhibir la constancia que acreditara la existencia de los actos combatidos, así como aquellas relativas a su notificación.

En ese contexto, atendiendo a que las Autoridades Demandadas en el presente sumario, no dieron cumplimiento a dicha carga procesa, el suscrito Magistrado concluye que desatendió la obligación que impone el numeral **286** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mismo que conmina a la Parte Accionante de un procedimiento judicial a acreditar los elementos constitutivos de su acción y así mismo, al Demandado de acreditar sus excepciones, por lo que, al haber incumplido con tal obligación, **dicha omisión conlleva la declaración de la nulidad lisa y llana de las cédulas de infracción que les fueron atribuidas**, en razón, insístase, por no ofrecer los medios necesarios para acreditar su existencia. Robustece el criterio adoptado por esta Sala, aplicadas por analogía y en lo conducente, las siguientes Jurisprudencias:

Época: Novena Época.

Registro: 170712

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXVI, Diciembre de 2007

Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 209/2007,

Página: 203

JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.

Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación para la autoridad administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su contestación.

Época: Décima Época.

Registro: 160591

Instancia: SEGUNDA SALA

TipoTesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización:

Libro III, Diciembre de 2011,

Tomo 4. Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 173/2011 (9a.)

Pag. 2645

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.

Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA SALA

Ahora este Juzgador analiza lo hecho valer por la parte actora en su escrito de demanda en contra del cobro del Derecho por Refrendo Vehicular, y se tiene que a través motivo de nulidad expuesto en el escrito de demanda identificado como **segundo**, la Parte Accionante arguyó de forma medular que el cobro que la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco le efectuó respecto al automóvil de su propiedad por concepto del derecho de Refrendo Anual Vehicular por el ejercicio fiscal **2022**, resulta violatorio del artículo **31 fracción IV** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior lo sostiene de tal manera al afirmar que dicho cobro no se ajusta a los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria, pues el servicio prestado por el Estado resulta ser el mismo en tratándose del refrendo de un automóvil, camión, camioneta, tractor y/o remolque, con el servicio que se presta respecto de una motocicleta, careciendo de justificación que en los numerales donde se contempla dicho servicio se hubiese hecho una notoria distinción al respecto; todo lo cual, a criterio de la demandante, transgrede en su perjuicio los principios constitucionales invocados.

En tales condiciones, se colige que -de manera sustancial- en el concepto de impugnación en escrutinio la demandante adujo haber resentido violaciones a su garantía de legalidad tributaria, ello al afirmar que el cobro materia de controversia fue efectuado con sustento en un precepto normativo que transgrede los principios de proporcionalidad y de equidad consagrados en el arábigo **31 fracción IV** Constitucional.

Por su parte, y en relación con tales argumentos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco se excepcionó manifestando que el argumento anterior resulta infundado, pues refirió que el servicio prestado por el Estado y que se contempla en el artículo **23 fracción III inciso a)** de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para **2022**, es distinto a aquel previsto en la fracción **III bis**, pues la primera de las fracciones cobra la tarifa por concepto de refrendo y **contempla emisión de la tarjeta de circulación en material PVC con un código de seguridad QR**, mientras que la segunda de dichas hipótesis **únicamente incluye la expedición de la tarjeta de circulación en papel**, situación que a criterio de la enjuiciada deja en evidencia que el servicio prestado no resulta similar y de ahí encuentre justificación el establecimiento de tarifas diferenciadas.

Ahora bien, esclarecidas las posturas medulares asumidas por las partes, es menester precisar que si bien los Juzgadores de Amparo son quienes cuentan con competencia originaria para efectuar el control concentrado de la constitucionalidad y/o convencionalidad de las normas generales, lo cierto es que esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco cuenta con facultades para llevar a cabo un control difuso respecto a la constitucionalidad de la disposición legal que sirvió de sustento a la Autoridad Demandada para efectuar el cobro del derecho combatido por la demandante; ello



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

con fundamento en lo establecido por los numerales **1º** y **133** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto a lo anterior, es menester señalar que en virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo **1** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad, y bajo esa tesitura, de conformidad con lo previsto en el artículo **1º** Constitucional ante citado, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio *pro-homine*, o pro-persona.

Así pues, es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo **133** en relación con el artículo **1º** constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior.

Ilustrativo de lo anterior resulta la siguiente jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"...POR MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS SEÑORES MINISTROS COSSÍO DÍAZ, FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ZALDÍVAR LELO DE LARREA, VALLS HERNÁNDEZ, SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ORTIZ MAYAGOITIA Y PRESIDENTE SILVA MEZA, se determinó que el modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad que debe adoptarse a partir de lo establecido en el párrafo 339, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 12.511. Rosendo Radilla Pacheco, contra los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 1º, 103, 105 y 133, de la Constitución Federal, propuesto por el señor Ministro Cossío Díaz, es en el sentido de que: 1. Los jueces del Poder Judicial de la Federación al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. 2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones. Y 3. Las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultados para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos. Votaron en contra los señores Ministros: AGUIRRE ANGUIANO, PARDO REBOLLEDO, por estimar que ésta no es la instancia adecuada para realizar este análisis, y AGUILAR MORALES, por la razón aducida por el señor Ministro Pardo Rebolledo". Es el resultado de la votación del tema concreto que estamos abordando. Señor Ministro Cossío Díaz..."

En estas condiciones, tenemos que el control de constitucionalidad y de convencionalidad debe ser entendido como el control que ejercen los órganos jurisdiccionales internos de un Estado, en relación con su Constitución y con los convenios y Tratados Internacionales ratificados por éste; de tal modo que, la normativa interna debe estar en armonía con la externa.

Y lo cierto es que en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública del día 14 catorce de julio de 2011 dos mil once, dispuso que es deber de todos los jueces nacionales tomar en consideración, al momento de dictar sus sentencias, el texto de la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados por México; lo anterior, sólo para efectos del caso concreto, y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones; tal y como puede apreciarse a continuación:

Registro No. 160525

Localización: Décima Época.

Instancia: Pleno.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Libro III, Diciembre de 2011. Página: 552.

Tesis: P. LXIX/2011(9ª.) Tesis Aislada.

Materia(s): Constitucional

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

En estas condiciones se hace patente que, ante los argumentos esbozados por la parte actora en el sentido de que el numeral **23 fracción III inciso a)** de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco donde se contempla el cobro por el servicio que por esta vía se combate, no respeta los principios de proporcionalidad y equidad tributaria estipulados por el artículo **31 fracción IV** Constitucional, este Tribunal cuenta con facultades para poder llevar a cabo un ejercicio de control difuso respecto a la constitucionalidad de dicha porción normativa, ello acorde a las consideraciones que se contienen en la siguiente jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal:

Época: Décima Época
Registro: 2006186
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Común, Administrativa
Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.)
Página: 984

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

*Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconventionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; **sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión,***



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconventionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.

Sentado lo anterior, se considera oportuno realizar un análisis de los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, siendo pertinente destacar que el numeral **31 fracción IV** Constitucional señala que los mexicanos tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), de los Estados y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Del dispositivo en mención, el cual encuentra su correlativo en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el arábigo **5 fracción I**, se desprenden algunos principios que rigen el sistema tributario, a saber: a) que se encuentren establecidos en una ley, b) Que los mismos sean destinados para el gasto público, y **c) Que resulten proporcionales y equitativos en cuanto a su determinación y cobro.**

Partiendo de ello, es de explorado derecho que el principio de proporcionalidad, de forma general, se refiere a que los sujetos pasivos de la relación tributaria, deben contribuir a los gastos públicos en función a su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de conformidad a sus ingresos, de este modo lo que se busca es que las personas que obtienen más ingresos tributen de forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Por lo que, para lograr su efectivo cumplimiento, se establecen tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no solo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos.

Asimismo, el principio de equidad tributaria, radica medularmente en la igualdad ante la Ley de todos los sujetos pasivos de una misma contribución, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico, respecto del mismo supuesto de causación, exención, deducciones permitidas, plazos de pago, entre otros, debiendo variar únicamente respecto de las tarifas tributarias aplicables, ello en respeto a su correlativo principio, ya anunciado. Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Registro: 232197

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 199-204,

Primera Parte Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: Página: 144

IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se

Página 15 de 23



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.

En esas condiciones, no debemos perder de vista que el cumplimiento a los principios tributarios a los que alude la Parte Actora, es distinto en tratándose de los impuestos, pues en el caso que nos ocupa nos encontramos ante un derecho por servicios, que, de conformidad al artículo **7 fracción II** del Código Fiscal del Estado de Jalisco, establece como: " II. Derechos. - Las contraprestaciones establecidas en la Ley, por los servicios que preste el Estado en su función de Derecho Público ". Por lo que se puede concluir que los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la Hacienda Pública como precio de los servicios de carácter administrativo prestados al contribuyente, por lo que, para atender a su proporcionalidad y equidad, **debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio**, de donde se sigue que las cuotas deberán ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

Así, para que los derechos cumplan con los requisitos de equidad y proporcionalidad, debe existir un equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general. En consecuencia, para analizar la proporcionalidad y equidad de una norma que establece un derecho se debe tomar en cuenta la actividad del Estado que genera la obligación de su pago, la cual permitirá decidir, si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable, resulta congruente con el costo que representa para la autoridad prestar el servicio relativo.

*Época: Novena Época
Registro: 196934
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo VII,
Enero de 1998
Materia(s): Administrativa Constitucional
Tesis: P./J. 2/98
Página: 41*

DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.

Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

Así pues, para efecto de estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponde, esta autoridad, estima necesario invocar el contenido literal del artículo **23 fracción III y fracción III bis** de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal **2022**; mismo que resulta del tenor siguiente:



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

Artículo 23. Por los servicios que preste la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Seguridad y, en su caso, la Secretaría de la Hacienda Pública, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

III. Por Refrendo Anual y Tarjeta de Circulación de PVC con código de seguridad QR, para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público.

a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques servicio particular y público: **\$711.00**

b) Placas de demostración: **\$1,725.00**

La tarjeta de circulación de PVC a que hace referencia en esta fracción III, tendrá una vigencia máxima de cuatro ejercicios fiscales considerando el de su emisión, y será obligatoria su sustitución anticipada en la presentación de los avisos de cambio de propietario, cambio de domicilio, cambio de características del vehículo, y en nueva dotación de placas de circulación.

III Bis. Por refrendo anual y Tarjeta de Circulación en papel para motocicletas: **\$285.00**

Así pues, de la exégesis del ordinal y apartados aquí transcritos, este Juzgador advierte que la cantidad que la Autoridad Demandada determinó y efectuó por el cobro del Derecho de Refrendo Anual contemplada en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal **2022**, para el vehículo propiedad del demandante resultó ser inequitativo y desproporcional, toda vez que el monto cobrado no trasciende al verdadero costo que para la autoridad implicó el otorgamiento del servicio prestado.

Esto así, ya que el mencionado cobro se realizó tomando como base el tipo de vehículo que se registra, elemento que transgrede el principio de equidad tributaria previsto en el artículo **31 fracción IV** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, el tipo de vehículo que se registra es un elemento ajeno a la actividad realizada por la autoridad para la expedición del refrendo anual de registro, mismo que no trasciende al costo del servicio prestado; pues el hecho de que sea un automóvil, una camioneta, una motocicleta o placas de demostración, no implica mayores costos materiales ni humanos para el Estado por el refrendo o registro de los mismos; **RAZÓN QUE RESULTA SER SUFICIENTE PARA CONSIDERAR INEQUITATIVO Y DESPROPORCIONAL EL COBRO DE DICHO CONCEPTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO AQUÍ SEÑALADO.**

Las consideraciones anteriores se encuentran sustentadas en las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mismas que resultan ser de observancia obligatoria para este Juzgador, y que a la letra señalan:

Época: Décima Época

Registro: 2016855

Instancia: Plenos de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 54,

Mayo de 2018, Tomo II Materia(s): Común

Tesis: PC.III.A. J/41 A (10a.)

Página: 1811

DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.

Los preceptos legales indicados, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos, sin brindar elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por todos sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para todos los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales.

Registro digital: 2016854

Instancia: Plenos de Circuito

Décima Época

Materias(s): Común, Administrativa

Tesis: PC.III.A. J/42 A (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1810

Tipo: Jurisprudencia

DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO.

El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, considera que los preceptos legales indicados violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto prevén el monto de derechos por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma. En congruencia con ese criterio, y con el fin de imprimirle mayor seguridad jurídica, atento a lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar las consecuencias jurídicas que conlleva la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas generales citadas, cuando se impugnan en amparo directo, con motivo de su aplicación en una sentencia definitiva que declaró la validez legal de los créditos fundados en tales preceptos, a saber: I. El tribunal responsable deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emitir una nueva en la que decrete la nulidad de los créditos fiscales por los conceptos indicados, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2011 a 2015, respecto del vehículo propiedad del quejoso; y, II. Los efectos de dicha nulidad deberán de atender al vicio de inconstitucionalidad detectado, ordenando a la autoridad administrativa demandada que emita una nueva resolución en la que inaplique la porción normativa que resultó contraria al texto constitucional, empero, vinculándola a cuantificar los derechos por esos servicios en función de la tarifa más baja. En adición a ello, es menester precisar de manera enunciativa, que el otorgamiento del amparo en esos términos, no podría tener el alcance de impedir la aplicación presente o futura de las disposiciones mencionadas en perjuicio del quejoso, ni servir de sustento para anular u obtener la devolución de sumas pagadas como consecuencia de actos diferentes, sean previos o posteriores a los créditos indicados.

Al imponernos del contenido de las jurisprudencias anteriores (y de las ejecutorias correspondientes) se advierte que el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito arribó a la conclusión de que los artículos **22, fracción III, y 24, fracción III**, de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, el primero correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil once, y el segundo numeral, correspondiente a los ejercicios de dos mil doce a dos mil quince, son violatorios del artículo **31, fracción IV**, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establecen el cobro de derechos por servicios relativos al refrendo anual y holograma, sin respetar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

Según se precisó, ello es así porque los indicados preceptos legales cuantifican el monto de dicha contribución, mediante un sistema tarifario que no corresponde al sistema especial que rige los principios de proporcionalidad y equidad de los derechos por servicios, pues no toman en cuenta el "costo de la actividad", basado en el despliegue técnico que el Estado deberá desarrollar para prestar el servicio público de refrendo anual de registro y holograma.



Así como tampoco consideran la correspondencia razonable entre ese "costo" y el monto de la cuota a pagar por el servicio análogo para todos los vehículos que describen las normas en cuestión, lo cual resulta indispensable para definir si un derecho por servicio colma o no tales principios tributarios.

Dicho lo anterior, al resultar ser en esencial similares el artículo que contempla el cobro del servicio aludido relativo a al ejercicio fiscal **2022**, este Juzgador estima que el criterio plasmado en la Jurisprudencia invocada resulta aplicable y de aplicación obligatoria por ello es dable considerar que el vicio detectado subiste, debiendo como consecuencia resolverse lo conducente a la luz de la conclusión a la cual arribó el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

En efecto del análisis del preinserto numeral **23 fracción III** la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco correspondiente, se logra colegir que, en similar circunstancia a las analizadas por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ese arábigo transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en la **fracción IV** del artículo **31** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así, porque el indicado precepto legal cuantifica el monto de dicha contribución, mediante un sistema tarifario que no corresponde al sistema especial que rige los principios de proporcionalidad y equidad de los derechos por servicios, no toma en cuenta el "costo de la actividad" basado en el despliegue técnico que el Estado deberá desarrollar para prestar el servicio público de refrendo anual de registro. Y tampoco considera la correspondencia razonable entre ese "costo" y el monto de la cuota a pagar por el servicio análogo para todos los vehículos que describen las normas en cuestión, lo cual resulta indispensable para definir si un derecho por servicio colma o no tales principios tributarios.

Por el contrario, se fija el cobro de tarifas atendiendo únicamente a factores que en modo alguno proporcionan datos idóneos sobre los trabajos técnicos a realizar como soporte cierto del costo de tal servicio; es decir, las tarifas sólo se establecen en función de los vehículos diferenciados en cuanto a su tipo, dimensiones y uso.

De ahí que, con base en las premisas apuntadas, es dable concluir que el precepto legal en escrutinio trasgrede los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria previstos por el artículo **31, fracción IV**, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tanto que la mecánica empleada por el legislador no brinda elementos fácticos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar su correlación con el monto de la cuota a pagar, que es precisamente el sistema propio de los derechos por servicios que rigen su proporcionalidad y equidad.

En efecto, por la naturaleza misma del servicio de trato, es bien sabida por todos los usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular; y debido a la simplificación de esos trámites, mediante meras deducciones, es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado, requiere un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos automotores, así como al cobro respectivo por el refrendo anual que hace constar la convalidación del registro. Es decir, el propietario del vehículo, únicamente, deberá acudir a la oficina recaudadora estatal correspondiente, mencionar su número de placas y nombre del propietario de la unidad, realizar su pago y recibir el comprobante de pago; incluso, dicho trámite se puede realizar en línea, a través del sitio oficial de internet del Gobierno del Estado de Jalisco.

Así, en la ejecución del aludido servicio público, por su naturaleza misma, es indudable que existe un limitado despliegue técnico similar para todos los vehículos, al margen de sus dimensiones, tipo y uso; es más, en el trámite relativo no se requiere presentarlos ante la autoridad. En otras palabras, el servicio que realiza el Estado, sólo gira en torno a una mera gestión y administración de datos vehiculares, que resulta ser el mismo en todos los casos, con independencia de que se trate de diferentes vehículos, lo que permite colegir con certeza que el legislador local hace una distinción indebida entre contribuyentes, en función del tipo, dimensiones y uso de los vehículos, empero, sin que el despliegue técnico que realiza la autoridad en la prestación del servicio sea diferente; por ejemplo, cuando se realizan revisiones mecánicas en otro tipo de servicios que presta el Estado, en cuyo caso sí resulta útil atender las particularidades de los vehículos, por requerir una diversidad de despliegue técnico; y de ahí que no existe ninguna razón válida que justifique dicho trato diferenciado en las normas impugnadas.

Por tanto, si el servicio ejecutado en el caso de trato, es análogo para todos los vehículos enumerados con antelación, con independencia de su tipo, dimensiones y uso; entonces, estos factores no dan certeza del costo real buscado para fijar cuotas iguales a quienes reciban servicios análogos, pues en la prestación de dicho servicio no varía la actividad que realiza el Estado; y siendo ese el criterio del legislador inmerso en las disposiciones legales en cuestión, debe declararse la inconstitucionalidad de los actos en los cuales se aplican las referidas disposiciones legales que contravienen los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

No se soslaya que el precepto refutado en la presente instancia, establece que el refrendo anual para motocicletas sólo incluye la expedición de tarjeta de circulación en un material de papel; sin embargo,



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

tal circunstancia **NO SUBSANA** la inconstitucionalidad de la norma, puesto que prevalece el cobro del refrendo y la expedición de tarjeta de circulación, sin atender al costo del servicio prestado, y sin que la autoridad justifique un despliegue técnico en correlación al costo del servicio, conforme a lo anteriormente explicado.

En atención a lo anterior, debe declararse que el artículo **23 fracción III inciso a)** de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal **2022**, incumple con los principios constitucionales aludidos a lo largo del presente fallo y por tanto debe ordenarse su **INAPLICACIÓN**.

Siendo oportuno precisar que si bien, se declaró la inaplicabilidad de la disposición normativa en comento, el efecto del presente fallo no puede traducirse en liberar a la demandante de la totalidad del pago del derecho por el servicio que le fue proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo **31, fracción IV**, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, De tal forma que, al preverse una cantidad fija mínima a pagar, **la restitución en el goce del derecho violado sólo implica que a la demandante se le deba dejar de aplicar la tarifa establecida en las hipótesis señaladas en el párrafo anterior, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima contemplada en el ordinal en comentario.**

Sirven de apoyo al criterio sustentado por esta Sala, aplicadas por analogía y en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia que a continuación se invoca:

Época: Novena Época

Registro: 170439

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008

Materia(s): Administrativa,

SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.

Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no necesariamente deben corresponder con exactitud matemática al costo del servicio recibido, sí deben fijarse en relación con el mismo.

Y por consiguiente, con fundamento en los artículos **75 fracción IV**, y **76 inciso b)**, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es procedente decretar la nulidad del acto administrativo controvertido, y condenar a la Autoridad Hacendaria Estatal a actualizar la tarifa por concepto del Derecho de Refrendo Anual aplicado a la esfera jurídica de la actora; ello de conformidad con la tasa contemplada por la **fracción III bis** del artículo **23** de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal **2022 dos mil veintidós**.

Época: Décima Época

Registro: 2000775

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 29/2012 (10a.)

Página: 1244

DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUELLOS.

Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA."

IX.- ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. Con fundamento en los artículos **6, 16** segundo párrafo, **17 y 116** fracciones **V y IX** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **70** fracción **XXXVI** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; **5** fracciones **I y III** y último párrafo, y **22** fracciones **I, IV y VIII** de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; **6, 7** fracciones **III, IV, VII y VIII, 91** segundo párrafo y **93** de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo **8** numeral **1** fracción **VII** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo **4** numeral **1** fracciones **I y III**, numeral **2**, y artículo **15** numeral **1** fracciones **I, II, V y VIII** de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y **4** inciso **m**) de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; se hace del conocimiento a las partes que la presente sentencia es información pública fundamental, por lo que este Tribunal se encuentra obligado a ponerla a disposición del público y mantenerla actualizada, a través de las fuentes de acceso público al alcance de este órgano constitucional autónomo.

De esta forma, los artículos **70** fracción **XXXVI** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo **8** numeral **1** fracción **VII** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, al ser disposiciones de orden público y de observancia obligatoria, imponen a las Salas de este Tribunal la obligación de hacer públicas las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, incluso aquellos que no hayan causado estado o ejecutoria; sin que por ello se estime vulnerado el derecho de privacidad, pues el interesado en que se suprima la información que la ley clasifica como confidencial, podrá acudir a ejercicio de los derechos ARCO previsto en los artículos **43** de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y **45** de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de las disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el acceso de toda persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad; estimar lo contrario conculcaría los principios constitucionales de transparentar y dar publicidad al actuar de las autoridades del Estado Mexicano y de los particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, así como promover la rendición de cuentas en la construcción de un Estado democrático de derecho, basado en una cultura de la legalidad.

X. DECISIÓN. Por lo expuesto en párrafos anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos **1, 2, 3, 4, 5, 10** de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos **1, 29** fracción **XII, 30** fracción **I, 72, 73, 74** fracción **II, 75** fracciones **II y V** y **76** inciso **a**) de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es de resolverse la presente controversia a través de las siguientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA. La competencia de esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la presente controversia; la personalidad y capacidad de las

Página 21 de 23



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

partes; la procedencia de la vía Administrativa elegida y la acción puesta en ejercicio por el actor; han quedado debidamente acreditadas en autos.

SEGUNDA. La parte actora, [REDACTED], acreditó parcialmente los elementos constitutivos de su acción; las autoridades demandadas **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO** y la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, no acreditaron sus excepciones y defensas, en consecuencia:

TERCERA. Se decreta el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, únicamente respecto del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación por el ejercicio fiscal **2023**, al haberse actualizado la hipótesis prevista en la fracción **XII** del artículo **29**, en relación con el numeral **30** en su fracción **I**, concatenado con lo dispuesto por el numeral **1**, todos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; ello en atención a los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidos en el considerando **VII** de la presente resolución.

CUARTA: Se declara la nulidad del cobro del crédito fiscal por concepto de Derecho de Refrendo Anual Vehicular respecto del automotor identificado con el número de placa de circulación **JPC6876**, relativo al ejercicio fiscal **2022**, para el efecto de que la autoridad hacendaria aplique en la esfera jurídica del ciudadano actor la tasa contemplada en la **fracción III bis** del artículo **23** de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal **2022**; todo ello por los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidas en el considerando **VIII**, de la presente resolución.

QUINTA. Se declara la nulidad lisa y llana de las cédulas de notificación de infracción **113/287343876, 113/289131949, 113/300340407, 113/300343015, 113/301495404, 113/315619394, 113/316281699, 113/316610536, 113/316704832, 113/319577602, 113/310132569, 113/321856063, 113/311178480, 113/327411756, 113/327736868, 113/335318131, 113/328125960, 113/328989166, 113/333613484, 113/352502456, 113/356356152, 113/357441900, 113/357891086, 113/362926726, 113/364870914, 113/366364633, 113/367590424, 113/368277835, 113/368669350, 113/377211970, 113/385898731, 113/385900285 y 113/386038823**, atribuibles a personal adscrito a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco y las cédulas de notificación de infracción **113/7577812 y 113/8258222**, atribuibles a personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, mismas que recaen al vehículo identificado con el número de placa de circulación **JPC6876**, lo anterior por los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidos en el considerando **VIII** de la presente resolución.

SEXTA. Se ordena a la Autoridad demandada efectuar la cancelación de los actos administrativos referidos en el punto inmediato anterior respecto de los cuales les corresponde su emisión, emitiendo el acuerdo correspondiente y realizando las anotaciones relativas en las bases de datos o sistemas respectivos, informando y acreditando todo ello ante esta Sala Unitaria.

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO.

Así lo resolvió y firma la **LICENCIADA ANA LOURDES LÓPEZ ORDÓÑEZ**, Secretario Proyectista en funciones de Magistrado Presidente de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por Ministerio de Ley, quien actúa en sustitución legal del Titular de la misma **MAGISTRADO MAESTRO ALBERTO BARBA GÓMEZ**, de conformidad con lo establecido por los artículos **14.1 y 19 fracción VI** de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con los diversos numerales **24 y 25 fracción II** del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como con sustento el acuerdo tomado en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 doce de enero del año 2023 dos mil veintitrés, y en atención a la licencia concedida al señalado en último término, por la **SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**, en la Sexta Sesión Ordinaria de fecha 23 veintitrés de marzo del año 2023 dos mil veintitrés; quien actúa ante su Secretario Proyectista **LICENCIADO VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA**, quien autoriza y da fe.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

La Sexta Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.